

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Irma Inés Ortega Bedoya
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A. y COLPENSIONES
PROCEDENCIA	Juzgado 003 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 003 2020 00237 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 262 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado afiliada
DECISIÓN	Revoca, modifica y confirma

Hoy, **primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente a los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de todas las partes y grado jurisdiccional de consulta para **Colpensiones**, en relación con la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Irma Inés Ortega Bedoya**, contra esa entidad y la **AFP Porvenir S.A.**, código de radicado único nacional 05001 3105 **003 2020 00237** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **36**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Pide la demandante se declare que la AFP Porvenir S.A. no cumplió con sus deberes de información y asesoramiento previos a su vinculación al RAIS, y al desconocer las implicaciones de tal acto, no existió una manifestación libre y voluntaria, por lo que el tránsito entre regímenes debe declararse nulo o ineficaz, por error, inducción a error o dolo, y como consecuencia, se condene a la AFP Porvenir S.A., a trasladarla al RPMPD administrado por Colpensiones, y a reintegrar a esta entidad los saldos existentes en su cuenta de ahorro individual, incluyendo rendimientos financieros, intereses, bono pensional, gastos de administración y la totalidad de cotizaciones efectuadas mes a mes, sin descuentos para pensión de invalidez y sobrevivientes, gastos administrativos, comisiones, seguros previsionales y garantía de pensión mínima; debiendo Colpensiones recibir tales rubros, reactivar la afiliación y consolidar la historia laboral, pide también condena en costas.

En sustento de ello, **en síntesis**, afirma que, **nació el 27 de julio de 1964**; entre el 16 de agosto de 1991 y el 30 de junio de 1995, laboró con el Municipio de San Pedro de Los Milagros, 202 semanas, afiliada al RPMPD administrado por el ISS hoy Colpensiones. El 21 de junio de 1995 se trasladó a la AFP Porvenir S.A., con ocasión de la información recibida en su lugar de trabajo por asesores de esta sociedad, asegurándole que el ISS estaba en quiebra, se iba a acabar y que cualquier fondo pensional a cargo del Estado correría la misma suerte, por eso sus aportes estarían más seguros en esa sociedad, reforzándole la idea con formulario diligenciado, procediendo a su firma, y confiada en haber tomado la mejor decisión no volvió a preocuparse por su situación pensional. En el hecho quinto relaciona los aspectos que a su juicio requerían información concreta, como capital requerido para pensionarse, bono pensional y consecuencias de redención anticipada, porcentaje deducido de la cotización para gastos de administración, que la pensión dependía del vaivén del mercado, monto de

pensión en caso de existencia de beneficiarios, pensiones especiales de alto riesgo en el RPM; tampoco se le explicaron las consecuencias reales de su movilidad, ni las implicaciones de una determinación de tal trascendencia, solo cuando varios colegas y compañeros se pensionaron con mesadas precarias para su subsistencia, se dio cuenta que la mejor opción era regresar a Colpensiones. Agrega que durante todo el tiempo de vinculación NUNCA fue contactada para nueva información, solo recibía extractos de su cuenta de ahorro individual. Ante tal situación pidió a Porvenir certificara su escenario frente a la pensión de vejez, informándosele que a los 57 años accedería a la garantía mínima, lo que implica un empobrecimiento y deterioro de su calidad de vida, de su mínimo vital y de su congrua subsistencia, con fundamento en ello, petitionó la nulidad o ineficacia del traslado, recibiendo respuesta negativa tanto de la AFP como de Colpensiones.

Subsanados los defectos advertidos por el Juzgado de conocimiento, en **auto del 22 de julio de 2021**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente notificadas de la actuación las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación, así:

AFP Porvenir S.A., frente a los hechos manifiesta que no son ciertos o no le constan; la edad de la demandante debe probarse con documento idóneo; los aportes a otro régimen deben figurar en la historia laboral; las circunstancias en que se dio la afiliación a esa sociedad deben probarse en los términos del artículo 167 del C.G.P., pero explica que la actora pretende desconocer que el **21 de junio de 1995 se trasladó al RAIS, y seguidamente efectuó movilidad a Colpatria, el 24 de abril de 1997**, ateniéndose a los formularios suscritos, y agrega que, *siempre brindó información clara, precisa, veraz y suficiente de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, en la que se expresa el funcionamiento, características y requisitos del régimen de ahorro individual con solidaridad, también se*

mencionaron las implicaciones de su traslado y los requisitos para pensionarse bajo el régimen de ahorro individual de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la misma ley y aunado a ello, cuenta con diversos canales telefónicos y electrónicos para brindarle información y buen servicio a sus afiliados. ... la decisión de suscribir el formulario de afiliación..., fue producto de una decisión libre, espontánea e informada de conformidad con el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, documento que se presume autentico en los términos del artículo 114 de la Ley 100 de 1993, los artículos 243 y 244 del Código General del Proceso y el parágrafo 54 del CPT. Manifestó **oposición** a las pretensiones, expuso los hechos, fundamentos y razones de su defensa y formuló **las excepciones** de: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y la genérica.

Colpensiones, de los hechos tiene como ciertos, la fecha de nacimiento de la demandante, 27 de julio de 1964, la petición de nulidad o ineficacia de traslado formulada a esa entidad el 12 de mayo de 2020 y la respuesta negativa. Los demás supuestos no le constan. **Resistió** las pretensiones que la comprometen, expuso los fundamentos de derecho y **formuló las excepciones** de falta de causa para demandar, presunción de legalidad de los actos jurídicos; inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP Porvenir S.A. ante Colpensiones, en casos de ineficacia de traslado de régimen; responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, juicio de proporcionalidad y ponderación, inobservancia del principio constitucional desarrollado en el artículo 48 Superior y en el Acto Legislativo 01 de 2005; improcedencia de la indexación de las condenas, imposibilidad de condena en costas, buena fe de Colpensiones, compensación, pago, prescripción y la innominada o genérica.

A la primera instancia se puso fin con **sentencia** proferida por el Juzgado Tercero laboral del Circuito **el 14 de octubre del año en curso**, en la que textualmente se decidió:

- 1. Declarar que la AFP porvenir S.A. no dio información clara veraz, oportuna y suficiente a la demandante Irma Inés Ortega Bedoya, cuando esta se trasladó a dicha afiliadora, Porvenir S.A.. en junio de 1995, ni le dio información veraz y oportuna a lo largo de toda la afiliación de esta. La señora Irma Inés Ortega Bedoya, se identifica con c.c. 43.361.402.*
- 2. Declarar que la AFP Porvenir S.A. causó grave daño, perjuicio o menoscabo a la seguridad social en pensiones de la demandante Irma Inés Ortega Bedoya.*
- 3. Declarar la responsabilidad constitucional y profesional de AFP Porvenir S.A. en el menoscabo de la seguridad social en pensiones de la demandante. Irma Inés Ortega Bedoya.*
- 4. Declarar la inaplicación constitucional de la pérdida de RPMPD que acaeció en cabeza de Irma Inés Ortega Bedoya, cuando esta se afilió a Porvenir S.A., en junio de 1995, ello en los términos del artículo 53 inciso 5º de la Constitución y artículo 272 Ley 100 de 1993. Y en su lugar, declarar que Irma Inés Ortega Bedoya, sigue inmersa en el RPMPD pero a cargo de la AFP Porvenir S.A.*
- 5. Absolver de todas las pretensiones a Colpensiones, sin perjuicio de las órdenes que enseguida se le darán.*
- 6. ordenar a la AFP Porvenir S.A., que dentro del mes siguiente a la fecha en que lo solicite por escrito la demandante, Irma Inés Ortega Bedoya, le reconozca, liquide y pague pensión de vejez bajo el RPMPD. Dentro de la carta en la cual la demandante Irma Inés Ortega solicite la pensión bajo el RPM deberá agregar o adjuntar certificado de retiro laboral*
- 7. Ordenar a la AFP Porvenir S.A, que dentro del mes siguiente a la fecha en que reconozca, liquide y pague pensión de vejez bajo el RPMPD a la demandante, solicite por escrito de Colpensiones elaboración de cálculo actuarial pensional con miras a subrogación pensional, aquí mismo se ordena a Colpensiones, que dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que lo solicite por escrito Porvenir S.A. elabore dicho cálculo actuarial pensional, y dentro de ese mismo lapso, dos meses, sea presentado por escrito a Porvenir S.A. AFP, a su vez Porvenir S.A. AFP dentro del mes siguiente a la fecha en que reciba por escrito el valor del cálculo actuarial pensional de manos de Colpensiones, procederá a su pago real y efectivo de dicha suma de dinero a esta entidad, Colpensiones.*
- 8. Ordenar a Porvenir S.A., que hasta tanto no pague real y efectivamente el valor del cálculo actuarial pensional a Colpensiones, continúa obligada a pagar la pensión de vejez bajo el RPMPD a la demandante Irma Inés Ortega Bedoya. Colpensiones subroga en tal obligación a Porvenir S.A., desde el momento y hora en que esta entidad pague a Colpensiones el valor del cálculo actuarial pensional de manera íntegra.*
- 9. Autorizar a Porvenir S.A. a enjugar parte del valor del cálculo actuarial pensional que aquí se le ordena pagar a Colpensiones, tomando para sí, para Porvenir S.A., los ahorros pensionales de la demandante, los rendimientos financieros, el bono*

pensional y cualquier otra suma de dinero que llegue al haber de la cuenta de ahorros de Irma Inés Ortega Bedoya.

10. *No prosperan las excepciones propuestas por Porvenir S.A. tal como fue explicado en la parte motiva de esta sentencia, si prospera la excepción de Colpensiones de inexistencia o intransmisibilidad de responsabilidad de la AFP hacia Colpensiones por ser esta última entidad un tercero en el acto jurídico de traslado de la afiliada.*

11. *Costas procesales a cargo de Porvenir S.A. AFP, agencias en derecho a favor de la demandante en la suma de \$4.000.000.*

Para la decisión del caso, y por apartarse de la línea de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de esta Corporación, el juzgador efectuó una amplia argumentación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º del C. G. del P., respondiendo planteamientos relacionados con las obligaciones de las AFP, las consecuencias de su incumplimiento cuando con la inobservancia de las mismas causan daño o menoscabo a la seguridad social de los afiliados; el principio jurídico de la responsabilidad y eficacia constitucional del derecho de los trabajadores, y las características del daño para que sea reparado por quien lo causa, concluyendo que para el caso concreto la AFP no demostró la cabal observancia del deber de asesoría en los términos de la regulación vigente para la fecha del acto de traslado del RPMPD al RAIS, en 1995; sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado y normas constitucionales, **la solución a tal situación no es la adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sino la declaratoria, por inaplicabilidad constitucional, de no pérdida del régimen de prima media con prestación definida por parte de la demandante**, al quedar evidenciado el perjuicio que sufrirá en la diferencia de mesada, debiendo la AFP Porvenir S.A., reconocer a esta, cuando lo solicite por escrito, acreditando retiro laboral, la pensión de vejez bajo los supuestos del régimen de prima media, con posterior subrogación de la obligación en Colpensiones, previo pago de cálculo actuarial pensional, impartiendo las instrucciones para ello.

Recurso de apelación, oportunamente interpuesto por todas las partes así:

AFP Porvenir S.A. No comparte el fallo toda vez que es manifiestamente contrario a derecho. Ratifica los alegatos por cuanto cumplió con el deber de información para la fecha de afiliación, lo que se encuentra acreditado con el formulario suscrito de manera libre y voluntaria y que no fue tachado dentro de la oportunidad legal pertinente, exigirle prueba diferente es imposible, pues no existía obligación de documentación adicional. Agrega que la parte demandante podía retornar, si así lo deseaba, al RPM dentro de los plazos establecidos en la ley y no lo hizo, por lo que su negligencia no puede ser imputable a la AFP. El artículo 9º del C. C. señala que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, luego una vez promulgada esta debe ser conocida por todos los habitantes, de lo cual no se encuentra eximida la parte activa, quien además no acreditó circunstancias especiales que se lo impidieran.

Para el profesional la sentencia vulnera el principio de congruencia establecido en el art. 281 del CGP, pues no se encuentra en consonancia con los hechos y pretensiones, ya que se ordena el reconocimiento de pensión de vejez y se declaran perjuicios que no fueron mencionados o probados; así mismo, se vulnera el derecho de defensa y contradicción de la AFP, porque es convocada para que se declare la ineficacia de traslado de régimen pensional y luego se fija el litigio en establecer si a la demandante le asiste derecho a que se le reconozca una pensión de vejez y se determine la responsabilidad respecto a supuestos perjuicios, sin que se le permitiera solicitar o aportar pruebas frente a dichas circunstancias, y en este punto es preciso señalar que no hay perjuicios probados o acreditados, sin que se puedan presumir. La actora no alegó ningún perjuicio, ni se pidieron, ni en el debate probatorio se demostró hecho dañoso o nexo causal. Una simulación pensional no es prueba de daño o perjuicio. Los

perjuicios se reconocieron con base en facultades ultra y extra petita que exceden los artículos 6º de la Constitución Nacional, y 50 del C.P. T. y de la S.S., y siendo la demandante afiliada ningún daño se ha generado, debiéndose demostrar para una condena de tal índole, como se explica en sentencia SL6497-2015 del 29 de abril de 2015, el daño, la culpa de la administradora y el nexo causal entre estos, lo que no aconteció. Cita apartes de sentencia de la Sala Segunda de esta Corporación, con fecha 22 de abril de 2022, proceso 2018 - 0181, que revoca decisión idéntica, ilustrando el exceso de facultades del artículo 50 CPT, estando integrado el sistema pensional por dos regímenes coexistentes y excluyentes, por lo que no es dable inaplicar la regulación de los mismos al no vulnerar normas constitucionales, pues ambos tienen naturaleza, financiación y características distintas, luego no existe fundamento para que la AFP pueda pagar pensiones con requisitos y condiciones propias del RPMPD, porque ambos tienen sus propias reglas para liquidar mesadas, ni existe ley o decreto que autorice la realización de cálculo actuarial para la conmutación pensional ya que esta o la subrogación se da cuando no hay afiliación al ISS, pretendiendo el juez aplicar disposiciones constitucionales pasando por alto el artículo 6º Superior. Pide finalmente ajustar la condena en costas, por vulnerar los criterios del acuerdo que las regula, por tratarse de un proceso declarativo de complejidad mínima. Insiste en la revocatoria de la sentencia y la absolución a su favor.

Colpensiones. Reitera que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 los afiliados contaban con un espectro más amplio a la hora de definir el régimen que se ajustara a sus condiciones particulares, las cuales debían contener un análisis mínimo que permitiera tomar su decisión, materializada en la suscripción del formulario, sin coacción alguna que desencadenara nulidad, y teniendo en cuenta que la demandante no se encuentra afiliada al RPM no es procedente la ineficacia del traslado deprecado, ni le es dable alegar vicio en el consentimiento al momento de

la incorporación al RAIS, por lo que no es procedente imponer cargas económicas a Colpensiones, máxime cuando se ha regido por lineamientos establecidos por la ley. Pide se revoque la decisión y se le exonere de obligación o responsabilidad.

Demandante. Argumenta que aunque interesante la posición del juez, se aparta de los argumentos en lo que tiene que ver con la negativa a declarar la ineficacia de la vinculación al RAIS, por lo que con respeto, considera que la opción propuesta, de acudir a la subrogación o permuta es innecesaria, ya que el precedente de la Sala de Casación Laboral impone a la administradora de fondos privados que reintegre o devuelva a Colpensiones, una vez declara la ineficacia, la totalidad del ahorro contenido o no en la cuenta individual, que incluya los frutos, los rendimientos, sin descuento por administración, comisiones, primas de seguros previsionales, e incluso impone, si es del caso, que los valores que falten los reintegre la administradora del fondo de pensiones a Colpensiones como si la afiliada siempre hubiere permanecido cotizando en el RPM, esto en aras de la sostenibilidad financiera.

Pide tener en cuenta lo explicado en sentencias SL1452-2019 y SL 1421 – 2019, frente a los efectos de la ineficacia, esto es, una ficción de que el acto de traslado nunca existió y por tanto los derechos de la demandante se consolidarían en el RPM que administra Colpensiones, razón por la que la apelación se encamina a que se revoque todo lo que tiene que ver con la **ineficacia**, porque se dan todos los presupuestos para ello, señalando la jurisprudencia especializada que la debida información no se entiende satisfecha solo con la suscripción del formulario, demostrándose en este caso la falta de consentimiento informado o error en el consentimiento que se mantuvo durante la vigencia de la afiliación, por lo que, reitera, se debe declarar la ineficacia, y restablecer los derechos prestacionales de la actora en el RPMPD.

En favor de Colpensiones se conoce también en grado jurisdiccional de consulta.

De la etapa de **alegaciones ante esta instancia** hizo uso **el apoderado judicial de Colpensiones**, expresando que el alcance de la asesoría que debió brindarse por parte de la AFP a la demandante debe ser valorada bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario o materialización del traslado, pues no es razonable, ni jurídicamente válido, imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente, ya que con tal exigencia se desvirtúa el principio de confianza legítima, exigiéndose además por el artículo 29 Superior que el acto se ajuste a las normas pre existentes al acto que se juzga. Para el profesional el juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de Colpensiones, quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación; y tampoco es admisible desestimar como medio probatorio el único documento exigido que era el formulario de afiliación, estándose ante un traslado realizado voluntariamente como se verifica del escrito de demanda, gozando tal acto de plena validez.

Luego de citar aparte de la sentencia SU062 de 2010, indica que permitir a una persona próxima a la edad de pensión beneficiarse y subsidiarse de las cotizaciones de los demás, resulta contrario no solo al precepto constitucional de la equidad sino también al principio de eficiencia pensional, y precisa que al ser Colpensiones una entidad pública no puede ir mas allá de la Ley, haciendo alusión a la prohibición para la movilidad entre regímenes frente a quienes se encuentren a menos de diez años de la edad para pensión, puntualizado que no se le pueden imponer a Colpensiones cargas económicas adicionales, cuando en virtud de la Ley

100 los afiliados contaban con un espectro de decisión más amplio a la hora de definir su situación ante el sistema, advirtiéndolo que al no encontrarse la señora Ortega Bedoya afiliada a Colpensiones, no es procedente el reconocimiento del traslado e incorporación en RMP y no le es dable tampoco invocar vicio alguno en el consentimiento al momento del traslado al RAIS.

El **apoderado judicial de la demandante**, ratifica los argumentos del recurso, cuestionando la decisión del a quo al no derivar la consecuencia de la ineficacia de la vinculación de su representado al RAIS, no obstante haber declarado que existió por parte de Porvenir falta de información completa, documentada, detallada y precisa ante una decisión tan trascendental, acudiendo a figuras como la conmutación o permuta, pretendiendo con ello dar una vuelta además de novísima, innecesaria, y en modo alguno ceñida a la extensa línea de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Especializada de esta Corporación, citando algunos pronunciamientos y radicaciones, peticionando se ajuste la providencia al precedente, y en virtud del grado jurisdiccional de consulta se disponga la restitución integral de recursos a Colpensiones. *Concluye solicitando se declare la ineficacia de la vinculación del demandante al RAIS suscrito por mi Mandante por falta de consentimiento informado o error en el consentimiento al momento de afiliarse a PORVENIR S.A., por lo que es claro que la Demandante ha estado afiliada SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD al R.P.M..*

El apoderado de la **AFP Porvenir S.A.**, afirma que esa sociedad siempre garantiza a los potenciales afiliados y vinculados el derecho de información, acorde a las disposiciones expedidas por la Superintendencia Financiera, que en Circular 019 de 1998 dispuso como única exigencia para que se expresara la voluntad con la suscripción del formulario, y en concepto del 29 de diciembre de 2015, se indicó por la misma entidad que el deber de asesoría a cargo de las AFP solo fue previsto con la expedición de la Ley

que reformó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, esto es Ley 1328 de 2009 y D.R. 2555 de 2010, por lo que las AFP únicamente cuentan con tal formulario.

Que como la jurisprudencia especializada exige a los fondos privados acreditar la debida información, esto es posible por cualquiera de los medios probatorios, por lo que se debe analizar debidamente el interrogatorio de parte y su conducta de permanencia en el fondo, que le permitieron conocer el funcionamiento del RAIS, y no demostró haber estado imposibilitado para el retorno al régimen público, además, conforme al artículo 9º del Código Civil la ignorancia de la ley no sirve de excusa, norma que ilustra con jurisprudencia constitucional.

En el hipotético evento de considerarse que el negocio jurídico celebrado entre esa sociedad y el demandante no tuvo validez, debe ordenarse el traslado de recursos en los términos del artículo 113, literal b) de la Ley 100 de 1993, esto es, saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, debiéndose observar también el contenido del artículo 1746 del Código Civil, sin que se incluyan los gatos de administración y primas de seguros al no corresponder estos valores al afiliado y verse afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción regulado en los artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. P. T. y de la S.S.

De mantenerse la decisión del a quo, pide ajustar la misma al precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, *en lo que hace referencia a los efectos de tal declaración, en tanto que, esta Corporación ha determinado que la consecuencia de la declaratoria es que, el traslado jamás existió; es decir, el afiliado siempre estuvo vinculado en el régimen de prima media con prestación definida; en consecuencia, PORVENIR S.A. debe trasladar a COLPENSIONES los rendimientos equivalentes al RISS (TASA ANUAL EFECTIVA DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DE LAS RESERVAS PENSIONALES DE Vejez, Invalidez y Sobrevivencia*

*administradas por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, si por el contrario, la decisión del Tribunal es que se debe reintegrar la totalidad de los rendimientos, comedidamente solicitamos AUTORIZAR a **PORVENIR S.A.**, a descontar de tal concepto las restituciones mutuas a que haya lugar, como quiera que, la AFP realizó una gestión a favor del afiliado que le generó rendimientos.*

En síntesis pide:

- 1. Revocar la sentencia de primera instancia en lo que hace referencia a la declaración de ineficacia;*
- 2. Revocar la decisión en cuanto a la condena a cargo de mi representada de trasladar a COLPENSIONES sumas diferentes a los aportes y rendimientos financieros, durante el tiempo de permanencia del actor con mi representada.*
- 3. En el evento de confirmar la decisión de la primera instancia en cuanto a declarar la ineficacia del traslado pensional, y a ordenar el reintegro de sumas adicionales a los aportes y rendimientos financieros de la cuenta de ahorro individual del demandante, se debe confirmar que estos montos no se indexen, por cuanto los rendimientos obtenidos por la gestión de PORVENIR S.A., con suficiencia superan los rendimientos que hubiera obtenido el actor en el RPMPD.*

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Teniendo en cuenta los argumentos de los recursos interpuestos, lo planteado en el escrito de demanda, lo debatido en el trámite procesal y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia, se circunscribe a establecer, si en el caso se cumplen los presupuestos de ley y las subreglas de la jurisprudencia especializada, para la declaratoria de ineficacia del acto de traslado de régimen pensional efectuado por la demandante a la AFP Porvenir S.A. el **21 de junio de 1995, con efectividad a partir del 1º de julio del mismo año**, y posterior movilidad a Colpatria Hoy Porvenir S.A., el 24 de abril de 1997, con efectividad a partir del 01 de junio siguiente, y consecuente con ello, disponer su inmersión automática en el RPMPD administrado por

Colpensiones; en caso afirmativo, se definirá lo relativo a las restituciones económicas y al otorgamiento del derecho pensional estudiado bajo facultades ultra y extra petita por el fallador de primer grado.

Pues bien, se explica por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia 31989 de 2008 bajo la figura de la nulidad, y a partir del año 2014 sentencia SL12136-2014, que la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico a la afiliación o traslado de régimen desinformado es la *ineficacia* o exclusión de todo efecto jurídico a tal acto, lo que encuentra fundamento en los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Decreto 663 de 1993, artículo 97 numeral 1º, aplicable a las AFP desde su creación, pues solo así es viable la escogencia de las mejores opciones del mercado, deber este que ha tenido una evolución en su regulación, inicialmente como información propiamente – años 1993 a 2009 conforme a Decreto 663 de 1993 – Estatuto Financiero-, Decreto 720 de 1994, y Ley 795 de 2003, entre otras disposiciones; posteriormente agregándose la asesoría o buen consejo Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010; y por último, con la doble asesoría desde el año 2014 Ley 1748 de esta anualidad, Decreto 2071 de 2015 y Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, sin que para su exigencia tenga incidencia el hecho de gozar o no el afiliado de régimen de transición o estar próximo o no a pensionarse o tener o no consolidado su derecho pensional, **y sin que de la suscripción del formulario se infiera su cumplimiento y tampoco se convalide por el transcurso del tiempo, por la movilidad entre administradoras del RAIS o por los actos de relacionamiento**, invirtiéndose en estos casos la carga de la prueba, quedando en cabeza de las AFP la obligación de acreditarla, la que por demás se juzga al momento del acto inicial, ello por la relevancia e implicaciones que conlleva para el derecho pensional, de carácter fundamental a voces del artículo 48 Superior y 4º de la Ley 100 de 1993 (ver entre otras sentencias SL19447-2017, SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019, SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL1838-2019,

SL4343-2019, SL4937-2019, SL5144-2019, SL 5462-2019, SL5533-2019, SL149-2020, SL373-2020, SL1763-2020, SL081-2021, SL145-2021, SL1055-2022, 1651-2022, 1729-2022 y 2173-2022), tesis ratificada vía tutela por la misma Corporación entre otras en sentencias (STL3182-2020, STL3187-2020, STL3191-2020, STL3193-2020, STL3196-2020, STL3197-2020, STL3199-2020, STL3200-2020, STL3201-2020, STL3202-2020, STL3226-2020, STL, 18 mar. 2020, rad. 56794, STL, 18 mar. 2020, rad. 57402, STL, 18 mar. 2020, rad. 57902, STL, 18 mar. 2020, rad.58678, STL, 18 mar. 2020, rad. 58918, STL, 18 mar. 2020, rad. 59124, STL, 15 abr. 2020, rad. 57168, STL, 15 abr. 2020, rad. 59268, STL, 30 abr. 2020, rad. 59302).

Y la Corte Constitucional en sentencia T-191 de 2020 explica:

88. La libertad de elección presupone conocimiento¹ de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias que implica la elección². Este conocimiento, a su vez, se rige por el principio de la información, el cual vincula al empleador al momento de enganchar al trabajador³, así como a la administradora de fondos de pensiones, al momento de afiliarse o trasladarse.

*89. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha derivado este principio del artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 3 literal c) de la Ley 1328 de 2009 y ha indicado que **las administradoras de fondos de pensiones tienen la obligación de brindar asesoría seria y concreta, conforme con un análisis o estudio previo de la posición, la condición y la situación fáctica del afiliado**. Esta información tiene como finalidad permitirle a los afiliados o usuarios del sistema pensional a adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional⁴, así como las ventajas y desventajas de la elección⁵.*

90. El principio de información se concreta, a su vez, en las siguientes obligaciones: a) se debe suministrar información y asesoría a través de un lenguaje claro, simple y comprensible, y; b) debe darse a conocer toda la verdad

¹ C. Sup. Jus., SL 1688-2019, p. 16.

² C. Sup. Jus., SL 1688-2019, p. 16.

³ C. Sup. Jus., SL 19447-2019, p. 18.

⁴ C. Sup. Jus., SL 2817-2019, p. 17.

⁵ C. Sup. Jus., SL 1688-2019.

⁶ C. Sup. Jus., SL 2817-2019, p. 17.

⁷ C. Sup. Jus., SL 1688-2019, p. 18: "Por tanto, la incursión en el mercado de las AFP no fue totalmente libre, pues aunque la ley les permitía lucrarse de su actividad, correlativamente les imponía un deber de servicio público, acorde a la inmensa responsabilidad social y empresarial que les asistía de dar a los usuarios la información necesaria para lograr la transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado".

objetiva –y comparada– de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar lo malo y parcializar lo neutro. Negrillas y subrayas intencionales.

Brillando por su ausencia prueba de la **asesoría** que se afirma por la AFP se le brindó a la actora al momento de su traslado de régimen, pues como se expone por la línea mayoritaria de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema y por la Corte Constitucional, la misma está a cargo de los fondo de pensiones, como entidades que prestan servicios financieros y de seguridad social, relativos al cubrimiento de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, y no del afiliado por cuanto: *i) tales servicios están íntimamente ligados con derechos de raigambre constitucional; ii) dicha entidad es profesional y/o experta, en una materia que esta «respaldada en complejos equipos actuariales capaces de conocer los detalles de su servicio, lo que las ubica en una posición de preeminencia frente a los usuarios»; iii) la reglamentación del sistema de seguridad social es compleja y en el caso del RAIS, no solo está integrada por un asunto «hiperregulado, sometido a múltiples variables actuariales, financieras y macroeconómicas»; iv) existen limitaciones de los usuarios relacionadas con sus «condiciones económicas, sociales, educativas y culturales, que profundizan las dificultades en la toma de sus decisiones». De ahí que, como se dijo, en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, la AFP demandada debía «[...] proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad», dando a conocer «las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes», siendo también de la administradora la carga probatoria sobre el particular, en los términos de los artículos 1604 del Código Civil y 167 del C. G. del P., este último en concordancia con la sentencia C – 086 de 2016, que en el acápite 7.4 prevé:*

En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

En la regulación aprobada por el Legislador este decidió -también de manera deliberada y consciente- no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales

puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejo abierta esa posibilidad al juez, "según las particularidades del caso", para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, "entre otras circunstancias similares".

Los eventos mencionados recogen en buena medida las reglas trazadas por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la propia Corte Constitucional. Sin embargo, el Legislador facultó a los jueces para evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta decisión resulta comprensible y completamente válida, no solo ante la dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta vertiginosos cambios –algunos tal vez inimaginables–, sino porque son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la "longa manus" del juez para restablecerla.

Estando definido por la Sala de Casación Laboral, que la ineficacia del acto de afiliación o traslado se caracteriza porque desde su nacimiento carece de efectos jurídicos, siendo las consecuencias idénticas a las de la nulidad, sentencia SL1688-2019, esto es, vuelta al estado anterior, agregando que:

... los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJSL1689-2019, CSJSL3464-2019, CSJSL4360-2019 entre otras).

Para el caso particular, debe además tenerse en cuenta que el artículo 230 de la Carta Superior dispone:

Los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

Y el artículo 7º del C.G. del P., aplicable por remisión al procedimiento laboral, indica:

Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.

Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, está obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, de la misma manera procederán cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.

Declarándose exequible el inciso segundo de esta disposición en sentencia C – 621 de 2015, en la que se dice sobre la doctrina dictada por las altas Cortes:

Como bien lo ha sostenido la Corte, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura -sala disciplinaria- y a Corte Constitucional, como órganos de cierre de sus jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto autoridades que son; (ii) de la potestad otorgada constitucionalmente a las altas corporaciones, como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y el cometido de unificación jurisprudencial en el ámbito correspondiente de actuación; (iii) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) de la necesidad de seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como de la confianza legítima en la autoridad judicial.

Providencia en la que además se fijan las condiciones que debe cumplir la carga argumentativa para apartarse del precedente del tribunal de cierre, así:

Según lo establecido en su larga jurisprudencia por este tribunal, una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial sólo puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de contra-argumentación que explique las razones del apartamiento, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del precedente emanado de las corporaciones judiciales de

cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga.

Aspecto este último también ilustrado por la jurisprudencia especializada en sentencia de tutela en que se analiza el tema de la ineficacia de traslado de régimen, con radicación 59370 del 6 de mayo de 2020, indicando que:

El respeto al precedente judicial de los máximos tribunales de cierre guarda una estrecha relación con el derecho a la igualdad, en tanto garantía constitucional que le permite a los ciudadanos obtener decisiones judiciales idénticas frente a casos semejantes. Paralelamente, el respeto de los jueces a los precedentes sentados por las Altas Cortes tiene un carácter ordenador y unificador, en tanto asegura una mayor coherencia del sistema jurídico, seguridad, confianza y certeza del derecho.

Por lo que es posible a los jueces de inferior jerarquía apartarse del mismo con una argumentación que cumpla los requisitos de suficiencia y transparencia, concluyéndose:

Debe insistir la Corte en que los funcionarios judiciales de la jurisdicción ordinaria deben seguir la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia. Así lo imponen no solo razones de seguridad jurídica, buena fe, certeza y previsibilidad en la aplicación del derecho, sino también a la igualdad de trato, en cuya virtud los casos semejantes sometidos a consideración de los jueces deben resolverse del mismo modo a como lo definieron los máximos órganos de cierre de cada jurisdicción.

Es normal que los jueces puedan disentir de los criterios judiciales de sus superiores; sin embargo, ello no los autoriza a desatender las construcciones jurisprudenciales trazadas por los órganos encargados por la Constitución de fijar, con carácter general, el sentido de los grandes dilemas jurídicos que suscita el Derecho en cada área. Si las percepciones, convicciones o divergencias de los juzgadores frente a una cuestión jurídica no pueden canalizarse a través de sólidos y persuasivos argumentos, estructurados acordes con la dimensión social de la Constitución Política de 1991, no es válido apartarse del precedente sentado por las Altas Cortes.

Luego, existiendo para el caso a estudio línea reiterada y mayoritaria desde el año 2008, acogida por esta instancia como un argumento de autoridad, guardando los asuntos analizados analogía estrecha con el que es objeto

de estudio, en aras de la garantía a los derechos a la igualdad y seguridad jurídica, lo procedente ante el incumplimiento de la obligación de diligencia debida, pues como se enseña en el escrito de demanda, se declaró por el a quo, y queda evidenciado en el plenario, la AFP Porvenir S.A. faltó *a su obligación de dar información veraz, oportuna y suficiente a la señora **Irma Inés Ortega Bedoya**, y de verificar sus condiciones particulares lo largo de la afiliación al RAIS,* (al punto que al contestar la demanda confiesa que no le consta la edad, tampoco las semanas aportadas a otro régimen, ni su anterior empleador, datos mínimos para una debida asesoría), **es la declaratoria de ineficacia de tal acto, tal como expresamente se solicita en el escrito de demanda, quedando la actora inmersa en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones y no por las AFP como lo definió la primera instancia, bajo la figura de inaplicación por inconstitucionalidad,** lo que implica que las cosas se retrotraigan al estado en que se encontraban antes de ocurrir la vinculación al RAIS y posterior movilidad entre AFP y por tanto, **Porvenir S.A.,** debe devolver a COLPENSIONES la totalidad del saldo de la cuenta de ahorro individual, con los rendimientos generados, incluido el porcentaje descontado por gastos de administración durante la vigencia de la afiliación a esa entidad, **lo que comprende tal concepto, al igual que los valores aplicados a seguros previsionales y garantía de pensión mínima** (ver entre otras sentencias SL1688, SL1689 de 2019 y SL2877-2020), últimos tres conceptos que deberán indexarse al momento de la entrega a Colpensiones (**ver entre otras, sentencias SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803, SL 4806 de 2021, SL755-2022, SL756-2022, SL1019-2022 y SL1055-2022**), restitución que debe cumplirse dentro de los **30 días** siguientes a la ejecutoria de esta decisión; **COLPENSIONES debe aceptar el retorno de la demandante al RPMPD, recaudar los valores que se ordena restituir y validar en su historia laboral** las semanas a las que

corresponden, para efectos del reconocimiento de las prestaciones a que haya lugar, en los términos de ley.

En relación con el cuestionamiento que a los efectos de ineficacia del traslado hace el apoderada de Colpensiones, basta indicar, *que la fuente constitucional para tales declaratorias, cuando ellas sean procedentes, resulta ser el artículo 48 de la CP que garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social y las órdenes emitidas frente a Colpensiones en el sentido de activar la afiliación, percibir las sumas trasladadas por la AFP y tener por vinculado al afiliado como si nunca se hubiese separado del RPM, no son condenas a título de indemnización o de resarcimiento de perjuicios, como equivocadamente pareciera entenderlo el Tribunal, sino que responden a ese derecho irrenunciable a la seguridad social ya mencionado, que se enfoca en que la persona obtenga una cobertura en los riesgos de IVM en el régimen en el cual se le tenga por válidamente afiliado, derivada del fruto de su trabajo y reflejada en los tiempos servidos o en las cotizaciones efectuadas al sistema.* Subrayas fuera del texto. Ver sentencia SL4803-2021.

Y de considerarse que la actora no estuvo afiliada al RPM, como se afirma por la entidad pública, es claro que al ser servidora pública del orden territorial se le debió brindar información comparada y al no hacerse se le cercenó la posibilidad de optar por la opción más beneficiosa a sus condiciones pensionales particulares, y como no es posible el retorno al estado anterior, al tener la obligación de escoger régimen, estando la solución para el caso expresamente prevista en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, cuando indica: *la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador,* lo procedente es la incorporación al RPM.

La AFP demandada al momento de cumplir la orden impartida en cuanto a **restituciones**, deberá remitir a Colpensiones relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Es intrascendente que la parte actora haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa del fondo de pensiones, en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización, cuando debe responder por una permanencia en el régimen, sin solución de continuidad; además, que precisamente por tratarse de descuentos que también existen en el régimen de prima media con prestación definida, no deben ser realizados por las AFP sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido afiliada, precisándose en sentencia SL 2877 de 2020, que *"la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida..."*.

Desde este punto de vista, no se estaría generando enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES o de la demandante, ya que se trata de la reivindicación de unas sumas que integran la cotización y que deben dirigirse a la administradora a la que ha pertenecido siempre sin solución de continuidad.

No se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección de régimen pensional al momento del traslado, en los términos del literal b) de la misma norma, en concordancia con el artículo 271 del mismo estatuto, decisión con la que en manera alguna se atenta contra la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues con el traslado integro de recursos se garantiza la equivalencia de condiciones en aportes en el evento de haberse

mantenido la vinculación, máxime cuando si bien es cierto esta es una regla introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el 48 de la Constitución Política, debe tenerse en cuenta el Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1º, que modificó el artículo 334 superior relativo al régimen de Hacienda Pública, que en su **parágrafo** reza: ***al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su efectiva protección.***

Y si bien es cierto el demandante en su interrogatorio y hechos de la demanda afirma que una de las razones para promover esta acción es obtener una mejor mesada pensional, ello se encuentra acorde con el calificativo irrenunciable de la seguridad social, que no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que desde un enfoque material, busca la satisfacción en su totalidad a fin de que los derechos e intereses objeto de protección sean reales y efectivos; *en este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada. Ver sentencias SL8544 y SL 13430 de 2016.*

Al imponerse al acto jurídico de traslado de régimen la sanción de ineficacia, no aplica para esta el termino prescriptivo que para la nulidad relativa prevé el artículo 1750 del Código Civil, ni la civil ordinaria y tampoco la trienal de las normas laborales, pues según la jurisprudencia especializada, entre otras, sentencia CSJ SL1689-2019, dicha figura no opera «de manera automática, en perjuicio de la posibilidad de acceder a derechos laborales o pensionales que gozan del carácter de imprescriptibles», razón por la cual «el análisis

de la pretensión relativa a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional», al ser «es una cuestión inherente al derecho a la seguridad social», que redundando en «un aspecto ínsito a la posibilidad de adquirir una prestación pensional» y, por tanto, puede reclamarse o hacerse exigible judicialmente en cualquier tiempo.

Frente **al reconocimiento y pago de la pensión de vejez**, deberá la demandante una vez satisfechos los requisitos de ley, efectuado el retiro del sistema – **y del servicio al ostentar la calidad de empleada pública - auxiliar administrativa almacenista del Municipio de San Pedro**, como lo informó en declaración de parte, **(artículo 19 de la Ley 344 de 1996)**, y consolidada la historia laboral por Colpensiones, proceder a su reclamación ante esta entidad, pues ni siquiera está incluida como una pretensión. Advertida tal circunstancia, en el evento de surgir alguna inconformidad frente al otorgamiento del derecho pensional, la competencia para dirimir el posible litigio radicaría en la justicia contenciosa administrativa. Ver Auto 941 de 2021 Corte Constitucional.

Ante el resultado de los recursos, no hay lugar a condena en costas en esta instancia.

Frente a las de primera, impugnadas por la **AFP Porvenir S.A., es del caso precisar**, que no es este el momento procesal para cuestionar su monto, al contarse para el efecto con trámite expreso previsto en el artículo 366 – 5 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca, modifica y adiciona** la sentencia proferida por el Juzgado 03 Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Irma Inés Ortega**

Bedoya contra la **AFP Porvenir S.A. y Colpensiones**, la cual queda en los siguientes términos:

1.- Confirma en cuanto declaró que la AFP Porvenir S.A. *no dio información clara, veraz, oportuna y suficiente a la demandante **Irma Inés Ortega Bedoya**, cuando esta se trasladó a dicha afiliadora, Porvenir S.A. en junio de 1995, ni le dio información veraz y oportuna a lo largo de toda la afiliación de esta, pero como consecuencia de ello, se declara la ineficacia de tal acto,* en los términos de los artículos 13 literal b), 271 de la Ley 100 de 1993 y subreglas de la jurisprudencia especializada, lo que implica la reactivación automática y sin solución de continuidad de su vinculación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES.

2. Se ordena a **la AFP Porvenir S.A.** restituir a COLPENSIONES la totalidad del saldo de la cuenta de ahorro individual de la demandante, con los rendimientos financieros, **incluyendo los valores descontados por gastos de administración, seguros previsionales y porcentaje para garantía de pensión mínima, durante la vigencia de la afiliación a esa AFP y a Colpatria**, estos tres últimos ítems debidamente indexados, obligación que debe cumplirse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia; COLPENSIONES recibirá tales valores y validará en la historia laboral de la afiliada las semanas a que corresponden para los efectos de ley, continuando esta entidad como su administradora pensional.

Al momento de cumplir la orden anterior, la AFP deberá remitir a Colpensiones relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

3.- Revoca la decisión revisada, quedando sin efecto las órdenes impartidas en cuanto reconocimiento de pensión a cargo de la AFP bajo la regulación del RPMPD, y subrogación pensional mediante pago de cálculo actuarial pensional y declara implícitamente resueltas las excepciones propuestas por las entidades accionadas.

4.- Ante el resultado de los recursos, no hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia. Las de primera deberán ser cuestionadas en la oportunidad señalada por el artículo 366 – 5 del C. G. del P.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado